

LOS MOVIMIENTOS SOCIALES POPULARES EN EL SIGLO XX: BALANCE Y PERSPECTIVAS

Mario Garcés

ECO, Educación y Comunicaciones

mgarces@eco-educacionycomunicaciones.cl

RESUMEN

El artículo se inicia planteando una mirada histórica a la producción de conocimientos sobre los movimientos populares en Chile y los efectos de la ruptura social y política de los años setenta. Revisa luego las principales coyunturas a lo largo del siglo XX en que se hicieron visibles diversos movimientos sociales populares, especialmente de obreros y pobladores. Se reconoce y valora a los movimientos sociales populares como sujetos colectivos democratizadores de la sociedad chilena y, desde esta perspectiva, se describen y analizan sus estrategias, demandas, relaciones con el sistema de partidos políticos y proposiciones de cambio social.

PALABRAS CLAVE: MOVIMIENTOS SOCIALES, SOCIALISMO, DEMOCRACIA, DICTADURA, HISTORIOGRAFÍA

ABSTRACT

This article presents an historical review of the production of knowledge concerning popular social movements in Chile and the political and social breakdown of the 1970's. It continues with a discussion of the main events throughout the 20th century, when several distinct social movements arose, especially labor movements and *pobladores* movements. Those movements are recognized and valued as collective democratizing subjects of the Chilean society and, from that perspective, their strategies, claims, relations with the political party system and propositions for social change are described and analyzed.

SOBRE EL AUTOR

Mario Garcés Durán es doctor en historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile y director de ECO, Educación y Comunicaciones. Además, es profesor del programa de Magíster del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago y profesor de la Escuela de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad ARCIS. Ha publicado, entre otros, *La explosión de las mayorías* (1985), *Crisis social y motines populares en el 1900* (1991) y *Tomando su sitio. El movimiento de pobladores de Santiago. 1957-1970* (2002).

Los estudios de los movimientos sociales populares en Chile han sido francamente tardíos con relación al protagonismo que los propios movimientos alcanzaron en el curso del siglo XX. Este desencuentro se explica tanto por los retrasos de las ciencias sociales para instalarse en el país, como por las dificultades y prejuicios del mundo académico para abrir espacio a los estudios de los sectores populares. *A grosso modo*, tal vez se puedan distinguir dos grandes momentos en que *el pueblo* ha sido objeto de estudios sistemáticos: en los años cincuenta, en que se difundieron los primeros trabajos sobre el desarrollo del capitalismo y del movimiento obrero en Chile. En efecto, fue en estos años que Julio César Jobet (1955), Marcelo Segall (1953) y Hernán Ramírez (1956) publicaron estudios relativos a la clase popular chilena articulada como movimiento popular en torno al movimiento obrero. En los años sesenta, en que la economía y la sociología ganaron en desarrollo y prestigio en el campo académico, la cuestión de los movimientos ocupó un lugar secundario y, casi en solitario, el historiador Jorge Barría publicó una historia del movimiento obrero y de la Central Única de Trabajadores (1971), mientras que el estudio de Alan Angell (1974) no se tradujo sino hasta después del golpe de 1973. Un segundo momento, mucho más prolífico, ha sido el de los años ochenta y noventa, en que un conjunto de historiadores, tanto nacionales como extranjeros, han publicado una gran diversidad de trabajos relativos a la “clase popular”, en un sentido más amplio que el del tradicional movimiento obrero. Entre otros autores, los trabajos de Gabriel Salazar, en particular *Labradores, peones y proletarios* (1985) y luego los de Sergio Grez, *De la “regeneración del pueblo” a la huelga general. Génesis y evolución histórica del movimiento popular en Chile (1810-1890)* (1997) y María Angélica Illanes, *“En el nombre del pueblo, del Estado y de la ciencia (...)”. Historia social de la salud pública. Chile 1880-1973* (1993), no sólo ampliaron la mirada a los sectores populares del siglo XIX, sino que reconocieron la historicidad de sujetos débilmente tratados por la historiografía, como el ancho y diverso mundo peonal, así como los artesanos, tanto en el ámbito urbano como rural. Nuevos trabajos han profundizado los estudios sobre la cuestión social, ya no sólo como crisis de inclusión de los grupos populares, sino que observando los conflictos “desde abajo”; y otra novedad, al menos parcialmente: más allá de Santiago, Julio Pinto, *Trabajos y rebeldías en la pampa salitrera* (1998); Sergio González, *Hombres y mujeres de la pampa* (1991) y Eduardo Devés, *Los que van a morir te saludan. Historia de una masacre: Escuela Santa María de Iquique, 1907* (1987) entre otros, han observado al “mundo pampino” del norte; Peter De Schazo en *Urban Workers and Labor Unions in Chile. 1902-1927* (1983) y el autor de este artículo en *Crisis Social y motines populares en el 1900* (1991), han estudiado los grandes movimientos obreros y populares de principios del siglo XX, reconociendo y valorando la acción de los anarquistas, que habían sido prácticamente ignorados en la historiografía marxista clásica. Todo el siglo XX está siendo hoy estudiado y revisado por diversos historiadores, incluidas las nuevas generaciones que egresan, en estos años, de las universidades chilenas.

Entre estos “dos momentos” de la producción historiográfica que hemos indicado, el de los años cincuenta y el de los años ochenta y noventa, no cabe ninguna duda que un conjunto de hechos históricos gravitantes, marcaron, interrogaron y estimularon el estudio de nuestra historia social del siglo XX: los proyectos de cambio social de los sesenta, en particular la Unidad Popular, y el golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Este último tuvo especial relevancia, tal vez más que ningún otro acontecimiento, en el sentido que si bien la Unidad Popular constituía una vieja aspiración política popular, cuyas huellas se pueden rastrear en los diversos intentos de la izquierda política por alcanzar o compartir el gobierno, el golpe, en cambio, echó por tierra todas las teorías y previsiones históricamente imaginadas. En efecto, el golpe de Estado de 1973, no sólo en la teoría sino que en la conciencia de la mayoría de los chilenos, superó todo lo imaginado en cuanto al ejercicio de la violencia desde los aparatos del Estado y acerca del papel y el lugar de las Fuerzas Armadas en la sociedad. Pero, volviendo sobre la teoría social y la historiografía, ha sido Gabriel Salazar quien probablemente ha indicado más agudamente el efecto crítico del “golpe” sobre el conocimiento social, en el sentido de la crisis de las teorías estructuralistas e “ideologizantes”, que predominaban en los sesenta. Éstas, a juicio del autor, adolecían de un peligroso desconocimiento de las dinámicas sociales, económicas y políticas específicas de “la cara interna de la nación”. De este modo, la crisis de los años setenta condujo inevitablemente a la “reconstrucción del proceso chileno”, a la revisión del marxismo, a la apertura a nuevas corrientes, a la revalorización de la cultura popular, y en suma, a la crítica de las “percepciones y conductas del pasado”, con el objeto de construir sobre nuevas bases, un “modelo renovado de acción histórica” (Salazar, 1990), es decir, a la necesidad de nuevos enfoques y miradas sobre la historia chilena, capaces de remontar la derrota de la Unidad Popular y más ampliamente del movimiento popular.

En este contexto y desde una perspectiva socio-política, tres problemas resultan claves para el estudio y la comprensión de los movimientos sociales populares en el siglo XX: por una parte, su propia constitución, formas de organización, demandas y estrategias predominantes; por otra parte, los modos en que los movimientos se han relacionado con la política, sus propias nociones de ésta, así como sus aportes y límites a los procesos de democratización que recorren el siglo XX chileno, que fueron, por cierto, violentamente interrumpidos por la acción de los militares en los años setenta. Y, en tercer lugar, más cerca del presente, será muy importante reconocer también los cambios que se produjeron en el campo popular en el contexto de dictadura, y cómo desde los “territorios” populares, los grupos de base se reorganizaron hasta desestabilizar suficientemente a la dictadura en los años ochenta y preparar, si no el camino, al menos las condiciones para el retorno a la democracia.

La consideración crítica de estos problemas no puede ignorar, sin embargo, el análisis de aspectos fundamentales de la configuración histórico-social chilena, que si bien no explican, al menos contribuyen a situar estos problemas en un contexto mayor. En efecto, mucho antes que Salazar nos interpelara sobre el “desconocimiento de la cara interna de la nación”, en los años setenta, Regis Debray (1971), al prologar su libro-entrevista a Salvador Allende, a principios de los años setenta, puso por escrito una percepción que muchos observadores externos no dejan de hacer hasta hoy de nuestra sociedad: Chile es un país marcadamente clasista, donde las diferencias sociales no se disimulan fácilmente (barrios, modos de vestir, lenguajes, color de la piel, status, redes, etc.). Pero Debray fue más allá e insistió en que no sólo se trataba de diferencias formales, sino que de diferencias que daban cuenta de agudos procesos de conflicto social. Desde una perspectiva marxista clásica, indicó que Chile era el país donde más aguda había sido la “lucha de clases” en América Latina, en el sentido que las clases no sólo eran expresivas de rasgos que las distinguían, sino que portadoras de proyectos relativamente articulados de sociedad. En este contexto, recreando libremente la tesis de Debray, se podía sostener que los actores del cambio en Chile eran, por una parte, diversas fracciones de la clase dominante, la oligarquía en el siglo XIX y la alianza entre la oligarquía y la burguesía en ascenso en el siglo XX, y la clase obrera, por otra parte. Sus proyectos consistían en capitalismo dependiente versus socialismo. Esta línea interpretativa ayudaba a comprender en términos muy generales el “mapa social y político” chileno, pero por cierto resulta completamente insuficiente a estas alturas del desarrollo de nuestra historiografía social. El carácter clasista de la sociedad chilena permite comprender la persistencia de ciertos conflictos y actores fundamentales, pero no es suficiente para comprender otros conflictos y actores que solían permanecer en la penumbra, por ejemplo, las clases medias, los campesinos, los indígenas, los pobres de la ciudad, todos quienes han sido protagonistas fundamentales en la historia del siglo XX chileno.

Si por una parte, la mirada clasista presenta algunas limitaciones para la comprensión de los movimientos sociales, por otra parte, la relación de éstos con la política y la democracia, plantea otros tantos problemas. En primer lugar, es evidente que los diversos movimientos sociales populares han sido portadores de sus propios discursos y prácticas sobre la democracia que no han coincidido con la valoración unilateral de la democracia como régimen político. En segundo lugar, también es claro que, más allá de estas diferentes valoraciones de la democracia, hay que admitir que la sociedad chilena, a diferencia de otras sociedades latinoamericanas, contó con una larga y relativamente estable experiencia de democracia representativa, particularmente en el siglo XX. En tercer lugar, sin embargo, así como Salazar ha llamado la atención sobre los efectos del golpe en la teoría social, Tomás Moulian ha señalado con agudeza los límites de nuestra experiencia democrática en el siglo XX, que por cierto se hicieron más visibles

después del golpe de 1973. En efecto, este autor ha indicado que en Chile predominaba hasta los años sesenta una “visión optimista de un país en el cual la democracia constituía una tradición”. Esta representación produjo “efectos de verdad” y llegó “a constituir una especie de mirada generalizada y transversal” que animó los proyectos de cambio de la década del sesenta. Empero, se trataba de una narración idealizadora, ya que miraba una sola cara de la moneda, la política, “poniendo entre paréntesis la social y la cultural” y pasando además por alto las “gruesas imperfecciones de nuestro sistema representativo” (Moulian, 2002: 138). La experiencia chilena con relación a la democracia, según el autor, es la historia de una dualidad: la democracia como gobernabilidad desde las elites y la democracia como proceso de democratización siempre incompleto y más como el “deseo de otro Chile”, desde el pueblo.

Desde esta perspectiva analítica que nos propone Tomás Moulian, resulta evidente que los actores que mayor énfasis han puesto en los “procesos de democratización”, en el “deseo de otro Chile”, es decir, aquellos que valorando el régimen político de democracia representativa han buscado ir más allá de la democratización del Estado para democratizar la sociedad, han sido los movimientos sociales nacidos del campo popular y de las clases medias. En el primer caso, desde el campo popular, para el siglo XX, los principales movimientos fueron el movimiento obrero, coyunturalmente los campesinos, más persistentemente los mapuches y el movimiento de pobladores. Para el segundo caso, de las clases medias, habría que mencionar los menos estudiados movimientos de los médicos de las primeras décadas del siglo XX y de los ingenieros de mediados de siglo, los movimientos de mujeres, en especial, las sufragistas, un poco más estudiadas en los últimos años. Sin embargo, el listado sería incompleto si no se hace referencia a la diversidad de movimientos más transversales o pluriclasistas, entre los cuales el más antiguo probablemente sea el movimiento estudiantil, y entre los más nuevos –sobre todo del último cuarto de siglo– el movimiento de derechos humanos, el cristianismo de base, los movimientos juveniles, los movimientos de homosexuales y también el más extendido y multifacético movimiento de mujeres, desde los años de la dictadura.

El movimiento obrero y popular y la emergencia de la “cuestión social” a principios del siglo XX

Desde el punto de vista social, el siglo XX chileno se inició con la emergencia de la llamada “cuestión social”, una categoría europea con la cual se buscaba nombrar “el problema obrero”. En nuestro caso, he sostenido en un trabajo publicado hace ya algunos años (Garcés, 1991: 233), que se trató de un doble fenómeno: por una parte, del deterioro de las condiciones de sobrevivencia de la clase popular, y por la otra, de la emergencia de la protesta social obrera encaminada a modificar esa situación de deterioro. En esta coyuntura, el principal protagonista fue el naciente movimiento obrero chileno, que desarrolló extensos movimientos

de protesta a través de huelgas y motines populares, en un ciclo que va desde 1903 –con la huelga portuaria de Valparaíso- hasta el gran movimiento de la pampa salitrera, que culminó con la mayor masacre obrera en la historia chilena, en la Escuela Santa María de Iquique, en 1907 (Devés, 1987; Garcés, 1991).

En este ciclo, la principal estrategia obrera fue la huelga y la búsqueda de instancias de negociación, con el objeto de mejorar sus condiciones laborales, así como sus salarios para hacer frente a sus deterioradas condiciones de existencia social, que comprometían al conjunto de la clase popular desde la segunda mitad del siglo XIX (Romero, 1984; Salazar, 1985; Grez, 1997). Cuando las demandas fueron desoídas y el Estado liberal de entonces no generó condiciones para la negociación vino el copamiento urbano, que terminó en violencia y represión. La violencia social se expresó como “estallido” o como “motín” mientras que la represión como ocupación militar de la ciudad y “masacre” en más de un caso, y la más extensa, la de Iquique (140 muertos según el informe oficial; 195, según el doctor Palacios; 900 según un militar que recibió los muertos en un primer turno; 2000 según estimaciones de algunos historiadores; 3600 según una conocida Cantata, Advis y Quilipayún, 1970). Tal vez no sea posible conocer la cifra real (Garcés, 1991: 212; Devés, 2002).

La protesta social de principios de siglo llenó de temor a la elite, que extremó la represión, y por otra parte, radicalizó las posiciones obreras que crearon su propio partido en 1912 (el Partido Obrero Socialista que fundó Luis Emilio Recabarren, junto a un grupo de líderes obreros en el norte del país) y estructuró, ya antes de la creación de este partido, las bases de una “política popular” en Chile, cuyos principales componentes fueron el desarrollo de la organización popular, la ilustración obrera y el socialismo como horizonte político de transformación del capitalismo.

En realidad, a principios del siglo XX, se estaba consolidando un cambio social fundamental, que se venía gestando desde el último tercio del siglo XIX: se extendía y articulaba una clase obrera minera, industrial y vinculada a los servicios como el transporte ferroviario y los puertos, que operaban como centro neurálgico del comercio de exportación e importación. Este cambio social –algo así como el prolongado parto de la clase obrera chilena– debía dejar atrás las viejas formas pre capitalistas que dominaban la economía chilena (pago en fichas y no en dinero, control del comercio, endeudamiento con las pulperías, castigos físicos, enganches no regulados de trabajadores, trabajo doméstico por la comida, pago en especies, etc.), todo lo cual hacía de la “proletarización” un camino que los peones –que constituyeron la mayoría de la clase popular en el siglo XIX– tendieron a rechazar, “alzándose en la faena”, emigrando, trasgrediendo los métodos de control semiesclavos, semicoloniales, todo lo cual contribuyó al desarrollo de esa imagen (y de esa identidad en parte externa, en parte asumida) del “roto

alzado” (Salazar y Pinto, 1999a: 146). En cierto modo, el origen de la clase obrera en Chile se relaciona de manera paradójica con el rechazo de las primeras formas de proletarización y una vez que éstas se consolidaron, con el rechazo a las formas de “explotación” que moldearon el capitalismo chileno dependiente, de las primeras décadas del siglo XX.

Sin embargo, el cuadro no sería completo, en términos de los orígenes de la clase obrera chilena, si no se reconoce que paralelamente a los procesos de proletarización de los peones, los artesanos habían probado con relativo éxito, a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, diversas formas de asociación basadas en la solidaridad mutualista. Desde estas asociaciones dieron lugar a progresivas formas de apoyo social en el campo del ahorro, la salud, la educación, adelantándose, en cierto sentido, a las formas que tomaría el “Estado social” durante el siglo XX. Es decir, para los artesanos, “lo social” tomó forma en una diversidad de iniciativas autónomas del Estado liberal, que crearon “escuela”, o si se prefiere “tradiciones organizativas”, las que de diversos modos tendieron a entroncar, no sin conflictos, con el naciente movimiento obrero de principios de siglo XX. Así por ejemplo, si bien es un hecho que en la primera “huelga general de 1890”, los artesanos (y su referente político más cercano, el Partido Demócrata) estuvieron ausentes o guardaron silencio (Grez, 1997: 744), las primeras organizaciones obreras en el Norte –las Mancomunales– buscaron realizar tanto objetivos de solidaridad social –es decir, mutualistas– como objetivos sindicales –es decir, de lucha reivindicativa– y políticos, en el sentido de la democracia y del socialismo. El “movimiento popular”, en realidad, articulando diversas tradiciones, tanto artesanales como peonales y obreras, a principios del siglo XX, tendió a moverse en una doble dirección: “hacia adentro” en el sentido de la organización, la solidaridad, la educación popular, y “hacia afuera”, en el sentido de la protesta social, capaz de copar ciudades –como Valparaíso en 1903 o Iquique en 1907–, llamar la atención de las autoridades políticas, saquear el comercio, y enfrentarse en desigualdad de condiciones con la policía y el ejército.

Evidentemente, la represión de la primera década del siglo XX dejó huellas y obligó a revisar las estrategias populares: había que encontrar modos de perseverar en la lucha social y política con autonomía, para lo que se estimó necesaria la fundación de un partido político propio: el Partido Obrero Socialista. Este partido que nació en el Norte, en la ciudad de Antofagasta, fue desde su origen un partido eminentemente obrero y popular que de algún modo amalgamó las tradiciones organizativas anteriores, pero con algunas diferencias: sería un partido de “la clase obrera” y desde este posicionamiento entraría a la lucha política institucional, proclamando que buscaba realizar la democracia no sólo en lo político, sino que en lo económico y lo social (Barría, 1971: 44).

La convergencia de los movimientos populares y de las clases medias: la reforma del sistema político en los años veinte

Lo que no consiguió la represión del primer ciclo de protestas de principios de siglo, volvió por sus fueros en los años veinte. La organización obrera se movilizó para enfrentar ahora, en alianza con las clases medias, la cuestión de la “alimentación obrera”. En efecto, hacia 1918, la Federación Obrera de Chile (FOCH), que organizaba a los trabajadores en Consejos Federales por provincias y departamentos, que reunían a uniones, sindicatos, sociedades y gremios, llamó a la formación de una Asamblea Obrera de Alimentación Nacional (AOAN). Se sumaron a esta iniciativa, el Congreso Social Obrero, que nucleaba a los artesanos, los estudiantes agrupados en la FECH, la Federación de la Clase Media (que se definía como apolítica), y diversos partidos políticos, entre ellos el Partido Obrero Socialista, la Agrupación Demócrata de Santiago, el Centro de Propaganda Radical, el Centro Liberal y la Asamblea de Propaganda Conservadora. Juntos elaboraron un petitorio al gobierno y llamaron a realizar “marchas del hambre” para exigir que éste modificara las políticas económicas, que condenaban al pueblo a la miseria. Tanto el ejecutivo como el parlamento tuvieron que escuchar al pueblo, suspendiéndose temporalmente el impuesto al ganado argentino, aprobándose la creación de “almacenes fiscales” y la instalación de ferias libres en los barrios, entre otros logros (De Diego *et al.* 2002: 79). La estrategia en esta ocasión fue la demanda debidamente formalizada, una amplia política de alianzas y la manifestación pública masiva en el centro de la ciudad (De Diego *et al.*, 2002).

Sin embargo, los problemas a estas alturas no eran sólo la “alimentación obrera”, sino más ampliamente, la ineficacia del sistema político oligárquico para reconocer las nuevas realidades económicas y sociales del país. Entre otros, aún no se promulgaba una legislación social que regulara las relaciones entre el capital y el trabajo, y por otra parte, pesaba también en la sociedad, la ausencia de canales de expresión de la clase media, que había crecido junto con el Estado y una relativa expansión del sistema de educación pública. Según algunos autores, la toma de conciencia de la clase media así como el desarrollo de la organización obrera chocaban con el sistema vigente y contribuyeron a que se expandiera “un sentimiento antioligárquico” compartido por las nuevas generaciones (Aylwin *et al.*, 1986: 20; Salazar y Pinto, 1999 b: 65). El malestar tomó forma política en la confrontación electoral de 1920, que enfrentó a liberales y conservadores. El caudillo liberal Arturo Alessandri ganó entonces por estrecho margen las elecciones presidenciales, en un contexto de renovada represión de la izquierda y de los movimientos sociales, especialmente, obreros y estudiantes (Ramírez, 1984: 120). Para Alessandri, como le indicó a uno de sus ministros, años más tarde, “había llegado la hora siempre incomprendida por los grandes afortunados [...] que no comprenden que la evolución oportuna es el único remedio eficaz para evitar la revolución y el desplome”.

me” (Poblete, 1945: 20). Pero la reforma no prosperó frente al poder de la oligarquía, que controlaba el parlamento, y agudizada la crisis, intervinieron los militares. Dos golpes de Estado (septiembre de 1924 y enero de 1925) facilitaron la entrada de éstos en escena, no sin dificultades por cierto, ya que se encontraban divididos entre los viejos oficiales conservadores y la denominada “oficialidad joven”, progresista y más cerca del caudillo político, Alessandri, y de otro que emergía desde sus propias filas, Carlos Ibáñez del Campo.

Las primeras leyes laborales en 1924 y la reforma de la Constitución en 1925 se impusieron, aunque tanto Alessandri como la alta cúpula militar se encargaron de inhibir e ignorar las propuestas de los movimientos sociales. En efecto, por única vez en la historia de Chile, una amplia “Asamblea Constituyente de Obreros e Intelectuales” se reunió en marzo de 1925 para definir principios constitucionales, que debían orientar la reforma. Entre estos principios, que fueron ignorados por el ejecutivo y los militares, se indicaban entre otros, la prioridad del Estado sobre los asuntos económicos y sociales; el establecimiento de un sistema político institucional federal y descentralizado con énfasis en los gobiernos locales; cámaras funcionales como poder legislativo con representantes elegidos por los gremios organizados del país; el desarrollo de un sistema educativo con protagonismo de los profesores y de los estudiantes; igualdad de derechos civiles y políticos de hombres y mujeres; supresión del ejército permanente; y responsabilidad efectiva y no simplemente nominal de los funcionarios del Estado (Garcés y Milos, 1988: 37; Salazar y Pinto, 1999a: 149).

Los principios constitucionales de la Asamblea de Obreros e Intelectuales de 1925 revelan un conjunto de contenidos fundamentales del “proyecto democrático popular” chileno, que por una parte, recogía viejas tradiciones liberales y artesanales del siglo XIX, así como las orientaciones socialistas que ganaban terreno entre los obreros organizados en el inicio del siglo XX. Estos contenidos constituirán componentes fundamentales de lo que se podría denominar “el programa popular” del siglo XX, es decir, orientaciones y propósitos que persistirán en el horizonte de las luchas populares, aunque se debe reconocer que algunas de esas orientaciones sufrirían evidentes modificaciones, hacia mediados del siglo XX, cuando las estrategias de los movimientos sociales, articulados con el sistema de partidos políticos, pondrían mayor énfasis en hacer valer sus demandas frente al Estado que en la autonomía de los propios movimientos populares de base.

El movimiento obrero y campesino así como la experiencia del Frente Popular

La reforma del sistema político de los años veinte no logró, en el corto plazo, garantizar un mayor desarrollo democrático, ni tampoco desplegar en profundidad las nuevas orientaciones para el desarrollo económico, que parcialmente

puso en práctica la dictadura de Ibáñez. La crisis mundial de los años treinta, no obstante, terminó de desarticular lo que quedaba del viejo sistema económico orientado hacia la exportación de materias primas (sobre todo de salitre) y reanimó a los movimientos sociales de diverso tipo. De este modo, en momentos culminantes de la crisis, grupos socialistas de civiles y militares tomaron el poder político y proclamaron la “república socialista” de sólo 12 días de existencia (4 al 16 de junio de 1932).

Los campesinos, en esta etapa, iniciaban procesos focalizados o acotados de sindicalización y demandas de tierras, tanto en el Centro como en el Sur del país. La legislación dictada en 1924 era ambigua respecto de garantizar el derecho a organización y negociación de los campesinos, razón por la cual el Estado, acogiendo el “veto patronal”, se encargó de impedir que este proceso se expandiera.

En la segunda mitad de los años treinta, el viraje histórico de los comunistas, que provino del VII Congreso de la Tercera Internacional (1935), encontró eco en Chile: cabía unir las fuerzas democráticas frente al avance del fascismo. El PC chileno (que nació de la incorporación del Partido Obrero Socialista a la III Internacional en 1922) reorientó entonces su política, y tanto socialistas como radicales, luego de variados acercamientos y con los efectos de por medio de una gran huelga ferroviaria (febrero de 1936), acordaron crear el “Frente Popular”. El movimiento obrero jugó aquí un papel fundamental, no sólo porque enfrentó al gobierno a través de la huelga ferroviaria, a la que se unieron diversos gremios, sino que formó parte orgánica del Frente Popular. Para ello, sin embargo, debió reunificar sus fuerzas, creando la segunda central obrera más importante del siglo XX: la Confederación de Trabajadores de Chile (CTCH) (Garcés y Milos, 1988: 48). Ésta debió resolver una cuestión crucial: terminar de aceptar o rechazar la legislación social de 1924, reformulada en el Código del Trabajo de 1931. Se trataba de una cuestión relevante, en el sentido que implicaba aceptar la regulación estatal no sólo sobre las relaciones capital-trabajo, sino sobre la propia organización obrera. Pero, además, como muchas organizaciones obreras habían surgido antes que se promulgaran las leyes laborales, hacia mediados de los años treinta, el movimiento estaba dividido entre organizaciones o sindicatos libres y sindicatos legales. La unidad era fundamental para crear el Frente Popular y se resolvió en el Congreso Constituyente de la CTCH, en diciembre de 1936, en una suerte de acuerdo negociado. Como indicó entonces un delegado comunista: aceptaban la nueva Central porque reconocía “la lucha de clases” y “a las masas obreras tenemos que tomarlas tales como son y no como nosotros quisiéramos que fueran, por lo tanto hay que hacer la unidad de los obreros revolucionarios con los obreros legalistas” (Garcés, 1985: 175).

El Frente Popular ganó las elecciones de 1938 y puso en marcha un programa de expansión económico-social del Estado, enfatizando en primer lugar los “roles empresariales” de éste (Correa *et al.*, 2001: 136). Se creó en enero de 1939 la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), con fuerte predominio de los ingenieros, profesionales de la clase media, que pasaron a ocupar posiciones relevantes en la estructura estatal. Por otra parte, el Estado expandió también en el mediano plazo y siempre insuficientemente sus “roles sociales” en el campo de la salud, la educación y la vivienda popular (“pan, techo y abrigo” fue una de las consignas del Frente Popular que indicaba simbólicamente las principales demandas populares).

La alianza de partidos de centro y de izquierda, así como la unificación sindical, se desarrollaron en estos años en un contexto de mayor apertura del sistema político, así como de una progresiva democratización social y cultural. Los años del Frente Popular (1938-1947) han sido objeto de variados estudios y tomas de posición entre los analistas y más recientemente también entre los historiadores chilenos. Fue en estos años que se validó esa representación de “país democrático”, a pesar de los límites de “los procesos de democratización”. Hubo entonces más de un punto de quiebre entre lo social y lo político. El más importante, en lo social, fue la postergación de la demanda por sindicalización campesina a cambio de la industrialización (el gobierno radical con el acuerdo de la izquierda postergó la promulgación de una ley de sindicalización y favoreció la búsqueda de acuerdos con la derecha para crear la CORFO). Por su parte, en el campo político, la izquierda vivió la tensión de ser parte del Frente Popular y del gobierno y al mismo tiempo de apoyar las demandas populares, lo que en una fase dividió a los socialistas y en otra, llevó a los radicales a romper con los comunistas. El Frente Popular terminó de este modo con el campo socialista dividido y con los comunistas expulsados del sistema político a través de una ley que los ilegalizó, borró a sus militantes de los registros electorales, amén de que previamente se coparon militarmente las explotaciones carboníferas de Lota y Coronel y se creó un campo especial de detenidos en Pisagua, al norte del país. Con todo, a pesar de que los comunistas fueron puestos fuera de la ley, éstos no renunciaron a los medios pacíficos de hacer política (Álvarez, 2003: 44), y el sistema de participación política se fue recomponiendo paulatinamente. El movimiento obrero, luego de divisiones partidarias, recuperó roles protagónicos en los años 50, cuando se creó la Central Única de Trabajadores (CUT). A estas alturas, la estrategia fundamental del sindicalismo era la negociación y la huelga, en estricta alianza –si no dependencia– de los partidos políticos, en especial de la izquierda (Angell, 1974; Pizarro, 1986). Los campesinos, por su parte, fueron prácticamente excluidos del sistema de participación política, y las mujeres dieron vida a los movimientos sufragistas, lo que les permitió votar para elegir parlamentarios en 1949 y para las presidenciales de 1952.

El deseo de otro Chile: la “revolución en libertad” y la “vía chilena al socialismo”

Las tensiones respecto del sistema democrático chileno así como al interior del campo de los movimientos populares que se evidenciaron durante los años del Frente Popular comenzaron a superarse, primero con la fundación de la CUT en 1953, gracias, entre otros, al liderazgo de Clotario Blest (legendario militante cristiano y anarco-sindicalista) y más tarde con un renovado protagonismo del sistema de partidos políticos chilenos, en la década del sesenta. La Unidad Popular es hija de este proceso y llevó a Salvador Allende a la presidencia, en 1970.

Pero, la verdad es que la Unidad Popular cierra un ciclo, que tuvo antes una “alternativa” en el centro político: la denominada “revolución en libertad” propuesta por la Democracia Cristiana chilena. Decimos alternativa, porque así fue presentada por sus gestores y seguidores, con diversas acepciones. Se trataba, según algunos, de una alternativa a la “revolución cubana” si se miraba el campo internacional, pero también de una alternativa al capitalismo liberal, así como más ampliamente a las diversas proposiciones de cambio que provenían del marxismo criollo. En realidad, el gobierno de Eduardo Frei Montalva fue una propuesta que buscaba producir cambios “desde arriba” (desde el Estado) con un significativo movimiento promocional articulado “desde abajo”, especialmente con los campesinos que se vieron favorecidos por la reforma agraria y los pobladores por las políticas de vivienda y de “promoción popular” que buscaban validar y orientar a las organizaciones de pobladores, que por cierto fueron anteriores a la promulgación de la ley de Juntas de Vecinos, en 1968. Más allá de la evaluación de los logros y límites de la administración DC, es evidente que al menos con relación a estos actores populares –los campesinos y los pobladores– la acción de la DC fue sustantiva en cuanto al incremento de la movilización de estos grupos, así como al grado de legitimidad que alcanzaron sus demandas. Es decir, más allá de todas las evaluaciones de derecha o izquierda, que por distintas razones se oponían a la DC, es evidente que las políticas de Estado, en esta etapa, favorecieron el desarrollo de la organización popular, contribuyendo de este modo a los procesos de democratización de la sociedad chilena. Otra cosa distinta es que esta mayor democratización fuera vista como una amenaza por la derecha y como una disputa en campo supuestamente propio, por la izquierda. Desde el punto de vista político, evidentemente estas disputas existieron, pero ello no puede negar el hecho histórico más sustantivo: en la sociedad chilena ganaron en presencia y legitimidad una diversidad de movimientos sociales populares que ampliaron las prácticas de participación y de democracia.

En el campo estrictamente institucional, sin embargo, lo que el sistema de partidos políticos chilenos no fue capaz de procesar fue justamente una noción de

democracia más amplia y diversa, capaz no sólo de valorar, sino de crear nuevas instancias de participación popular con capacidades de ampliar las dinámicas de auto-gobierno de la sociedad. Sírvanos a este respecto, sólo un ejemplo. Cuando se debatió y aprobó finalmente la ley de Juntas de Vecinos, a fines de los sesenta, los parlamentarios opositores a la DC lograron que ésta modificara el proyecto original que quería hacer depender estos organismos del Ministerio del Interior (propósito ciertamente de sesgos corporativistas de la DC), pero no lograron proponer una alternativa que vinculara a las Juntas de Vecinos en una propuesta de ejercicio del “gobierno local”, lo que habría obligado a revisar la ley de municipalidades. La izquierda entonces, como representante de las clases populares, obtuvo una victoria a medias, impidió que se impusiera la lógica corporativista de la DC, pero no fue capaz de elaborar una propuesta de gobierno local democrático, que hubiera favorecido la participación popular “desde abajo”.

Los demócratacristianos terminaron su gestión de gobierno divididos en muchos sentidos, pero básicamente entre sus lealtades al gobierno y a la lógica de cambios “desde arriba” por un lado y por otro lado la lealtad a sus bases populares, que habían hecho rápidos aprendizajes de “movilización social” y que aspiraban a producir cambios más de fondo tanto en la justicia social como en la participación popular. En la imposibilidad de resolver sus propios conflictos, y en la reiterada afirmación del “camino propio”, la DC perdió la elección de 1970. El clima político popular, fuertemente animado por la izquierda que estimulaba la movilización popular y de paso capitalizaba el descontento de las bases con la DC, facilitó el triunfo de Allende.

Los movimientos sociales populares, no sólo se expandieron, sino que se diversificaron en la década de los sesenta. Mientras el movimiento obrero siguió ocupando un rol central en las luchas populares, los campesinos hicieron su entrada en escena, a través no sólo de la reforma agraria, sino de una nueva ley de sindicalización, mientras que los pobres de la ciudad —que eran la mayoría— pusieron en marcha en estos años el mayor movimiento social —el de los pobladores— para alcanzar una vivienda digna en la ciudad de Santiago (Garcés, 2002).

Las demandas de los movimientos fueron entonces, predominantemente por el alza de los salarios (para compensar entre otros los efectos de la inflación), la negociación por rama de la producción, la tierra y la vivienda. Paralelamente, acompañando a las demandas, se iban ensayando o exigiendo nuevas formas de participación en la empresa, las tierras expropiadas y el poblamiento urbano. En este contexto, las estrategias dominantes de los diversos movimientos combinaron en los años sesenta y setenta formas de lucha y de presión institucionales con formas extra-institucionales. En efecto, los obreros bien podían ir a la huelga como ocupar los centros laborales; los campesinos podían

organizar sus sindicatos y ser beneficiados por la ley de reforma agraria, pero también “tomar los fundos” para acelerar la aplicación de la ley; y, en la ciudad, los pobladores incrementaron la presión en tal grado que el Estado se vio obligado a construir más viviendas y a distribuir “sitios” cuando el movimiento realizaba ocupaciones casi cotidianamente, en especial en la coyuntura 1969-1970.

Con el triunfo de la Unidad Popular en 1970, los movimientos sociales alcanzaron un protagonismo histórico y logros nunca antes vistos: la CUT se transformó en interlocutor válido y directo del gobierno; los pobladores, con el apoyo del Estado, construyeron más viviendas que en toda su historia, mientras que los campesinos ingresaron definitivamente a las luchas democráticas. Por cierto, esta etapa es la más activa y palpitante de la historia social chilena, tanto por sus avances como por su trágico final. Se trató, sin lugar a dudas, de la mayor experiencia histórica de participación popular, en escala ampliada, de la sociedad chilena, que no sólo fue aplastada por el golpe de 1973, sino que en su propio desarrollo, durante la Unidad Popular, abrió nuevos derroteros para la participación y la democracia así como interrogantes que aún acompañan a la izquierda política y a los analistas de ese período histórico.

Evidentemente, el proyecto político de la Unidad Popular era más radical que el de la DC, en el sentido de su proyección socialista. Pero, en otros aspectos relativos al sistema institucional y la democracia, tenían más de una afirmación en común. En efecto, la originalidad de la vía chilena al socialismo, consistía en que buscaba hacer el tránsito del capitalismo al socialismo en libertad y democracia, como lo proclamaba reiteradamente Salvador Allende. El MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria, fundado el 15 de agosto de 1965, que tuvo entre sus principales dirigentes a Miguel Enríquez) y sectores del Partido Socialista se encargaron muchas veces de indicar que ello no sería posible sin pasar por un “enfrentamiento armado”, mientras que la derecha, al poco andar el gobierno, pondría en marcha estrategias que combinaban la acción institucional con la extra-institucional, animadas y apoyadas, desde el día que se eligió a Allende, por el gobierno de los Estados Unidos. Desde esta perspectiva y teniendo en cuenta el desenlace de la Unidad Popular, es evidente que ésta fue desbordada por la derecha, que optó finalmente por la cancelación del Estado de derecho y del régimen democrático, así como por la izquierda revolucionaria, la que, cuando el conflicto se agudizó, buscó radicalizar la movilización popular con el objeto de “saltar” de la fase democrática a una fase decididamente socialista del proceso chileno.

Pero, este doble desbordamiento de la UP fue resultado de diversos procesos, entre los cuales pesaron la precariedad y las insuficiencias históricas del sistema democrático chileno. Por una parte, las clases dominantes tradicionales y la clase media —a las que unió el miedo al cambio e ideologías conservadoras—,

muy pronto, se articularon como movimiento anti-socialista y en el corto plazo "golpistas", es decir, de contenidos anti-democráticos, para lo que apelaron a las fuerzas armadas, negándose incluso, en las horas cruciales previas al golpe, a dialogar y negociar con Allende cuando se los solicitó la Iglesia Católica, a través del Cardenal Silva Henríquez. Por otra parte, en el campo popular favorable a la UP, la movilización social tanto reivindicativa tradicional como las de nuevo cuño (formación de comités de participación en las empresas del área social así como "ocupación de hecho" de muchas otras para que fueran incorporadas al área de propiedad social, Juntas de Abastecimiento y Precios, JAP) llevaron después del "paro de octubre de 1972", a la constitución de "cordones industriales" y "comandos comunales" (en el primer caso, se trataba de asambleas y comités que coordinaban a los sindicatos de empresas territorialmente en diversos sectores de la ciudad, mientras que en el segundo, se promovía la coordinación de organizaciones obreras, de pobladores y campesinos, en el nivel comunal). Entonces, miles de chilenos de pueblo coreaban por las calles de Santiago y de provincias, las consignas del "poder popular" (Gaudichaud, 2004). ¿Qué podía significar el "poder popular" en ese contexto de crisis global de la sociedad? ¿Qué noción de "poder del pueblo" articulaba al programa de la Unidad Popular? ¿Cómo imaginaban "institucionalmente" los partidos de la izquierda las nuevas formas de participación popular?

Muchas de estas preguntas no fueron satisfactoriamente respondidas y aún problematizan las lecturas del fracaso de la Unidad Popular. Sin embargo, se puede sostener como hipótesis que esas dinámicas de movilización popular –más allá de la ideologización reinante– expresaban también el "deseo de otro Chile" más radicalmente democrático. Como ha indicado Peter Winn, en este período se produjo la coexistencia de una "revolución desde arriba", la programada por los partidos y el liderazgo político de la Unidad Popular, y los efectos que ésta tuvo, cuando efectivamente triunfa la Unidad Popular en 1970, para desencadenar y potenciar una "revolución desde abajo", desde las bases (Winn, 2004: 201). La Unidad Popular contaba con escasos instrumentos teóricos y prácticos para procesar las nuevas experiencias de participación que ella misma había contribuido a crear, no sólo durante los tres años de gobierno de Allende, sino en su tradicional apoyo a las movilizaciones populares a lo largo del siglo XX. La izquierda chilena entonces no sólo pecó de ingenuidad frente al golpe, como lo demostró su impotencia el día 11 de septiembre, sino que también pagó los costos de sus propias insuficiencias tanto programáticas como políticas. Su derrota adquirió entonces un carácter estratégico, tanto a propósito de sus equivocadas percepciones de la sociedad chilena (por ejemplo, su errónea visión sobre el profesionalismo y la no-deliberación política de las FFAA), como de sus formas de relación autoritarias o dirigistas con las organizaciones populares (buscando imponer la dirección de los partidos políticos más que el respeto por la democracia de base y la autonomía de las organizaciones sociales), los límites de sus propuestas de cambio en el sentido de la participación popular (que le impidieron

valorar y proyectar las nuevas formas de asociación popular, como los cordones industriales y comandos comunales), así como sus propias divisiones internas (que limitaron la gestión de gobierno y transformaron muchas veces en insalvables sus divergencias políticas).

Los nuevos movimientos sociales y la lucha en contra de la dictadura

La dictadura canceló el sistema democrático chileno. Pero más que eso, los militares chilenos actuaron como “ejército de ocupación” sobre las ciudades para reprimir y disciplinar a la sociedad popular. Si por una parte, se cancelaba la democracia como sistema político, por la otra se bloqueaban los más diversos procesos de democratización social que la sociedad había generado desde sus bases. La dictadura ejerció entonces el poder total a través del terror, la violación sistemática de los derechos humanos y el desprecio y control del pueblo. La represión no sólo se dirigió en contra de los militantes de la izquierda política sino que en contra de los diversos movimientos sociales populares. En el caso de las ciudades se les reprimió, en tanto que “trabajadores” y en tanto que “pobladores”, allanando “fábricas” y “poblaciones”, los dos espacios simbólicos más relevantes en el desarrollo de los movimientos populares urbanos: el movimiento obrero y el movimiento de pobladores.

El movimiento popular tomó años en rearticularse y elaborar respuestas para la nueva situación creada por la dictadura. Nuevos movimientos y nuevas prácticas asociativas se fueron abriendo paso entonces, sobre todo en las “poblaciones populares” y entre los sectores medios, que contaron con el apoyo de la Iglesia católica, de las ONG y de los partidos políticos en la clandestinidad. Entre los nuevos movimientos, las Agrupaciones de Víctimas de la Represión, así como las Iglesias cristianas y profesionales de clase media fueron fundamentales para el desarrollo de un movimiento de derechos humanos; los pobladores animaron variados movimientos culturales juveniles así como de comunidades cristianas de base; profesionales de clase media y diversas organizaciones de mujeres de población fueron también fundamentales para el desarrollo de un “movimiento de mujeres”, ahora con poderosos contenidos feministas; también el sindicalismo en medio de enormes dificultades –provenientes tanto de la represión como del nuevo modelo de desarrollo neoliberal– buscó nuevas formas asociativas y hacer también visible su malestar. En suma, la “sociedad civil” se mostró como un espacio diverso y creativo para rearticular el “tejido social” roto por la dictadura.

El malestar social generado por el régimen autoritario logró después de diez años expresarse finalmente en el espacio público en un ciclo de “protestas nacionales” que se verificaron entre 1983 y 1986 y que prepararon el camino para el reestablecimiento de la democracia. La convocatoria a las primeras protestas vino desde el sindicalismo, pero pronto éste demostró su debilidad para sostener

en el tiempo la movilización popular. Entonces, se hicieron visibles como protagonistas fundamentales los “pobladores”, especialmente los jóvenes y mujeres de pueblo, que más habían ganado en desarrollo (De la Maza y Garcés, 1985). Una nueva ola represiva fue la respuesta del régimen militar, que sumó nuevas víctimas, miles de detenidos, relegados e incluso nuevos detenidos-desaparecidos en la década de los ochenta.

En esta etapa, en ausencia de espacios de negociación, la estrategia predominante de los movimientos sociales fue de tipo expresiva: variadas formas de desobediencia civil (un día en el mes, en que se convocaba a la protesta, no se enviaban los niños al colegio, no se hacían compras, y se hacían sonar las cacerolas al anochecer), manifestaciones relámpagos en lugares céntricos, paros universitarios y barricadas en los barrios populares cuando caía la noche. Las “protestas nacionales” si bien lograron hacer visible el malestar de la sociedad y favorecieron la rearticulación del sistema de partidos políticos, no lograron derribar a la dictadura, ni hacer visible y compartido un proyecto político de transformación de la sociedad, que diera cuenta de las nuevas dinámicas y demandas de los movimientos sociales populares. En este contexto, se impuso una estrategia de salida intra-institucional a la dictadura, bajo predominio de una alianza de partidos políticos democráticos.

Los movimientos sociales y la transición a la democracia

La transición chilena, presentada al mundo por los medios de comunicación como exitosa, se estructuró sobre la base de un pacto con el poder militar y empresarial (los denominados poderes de facto), que incluyó una reforma parcial a la Constitución elaborada por los militares y hecha aprobar bajo formas antidemocráticas en 1980, la continuidad del modelo neoliberal y la exclusión de los movimientos sociales. De este modo, se transitó, en verdad, hacia una democracia elitista –como reconstrucción de un sistema político– inhibiéndose una vez más el desarrollo de la participación ciudadana y de los movimientos sociales. Como en una especie de “profecía autocumplida”, los partidos políticos y los dirigentes del Estado chileno proclamaron la debilidad de la sociedad civil y la centralidad del Estado en la construcción de la sociedad. En realidad, se trató más bien del cíclico retorno a la democracia concebida como “governabilidad”, que sigue estructurando las nociones dominantes de democracia entre los dirigentes políticos chilenos.

En la actualidad, en Chile, la dualidad a la que ha hecho referencia Tomás Moulian es aún más acentuada que en el pasado; la democracia opera como sistema político elitista y mediático mientras la sociedad vive los efectos de la dualización social provocada por el neoliberalismo, con débiles movimientos sociales capaces de emprender “tareas democratizadoras”. Se vive en Chile una acentuada fragmentación de la sociedad popular y de las dinámicas de los

movimientos de base. Mientras, por una parte, el Estado pone en desarrollo variadas políticas sociales que buscan resolver algunos de los problemas sociales más apremiantes, pero a decir verdad, muchas veces en la superficie, los grupos de base más dinámicos ensayan propuestas e iniciativas de rearticulación que deben disputar con los afanes disciplinadores del Estado y con las más diversas expresiones de anomia social, que han ganado espacio en los barrios populares (delincuencia, narcotráfico, ausentismo escolar, “barras bravas”, etc.).

Con todo, se van generando nuevas agrupaciones y orientaciones movimientistas: los grupos anti-globalización, foros ciudadanos, redes temáticas o sectoriales especialmente de mujeres, asociaciones de identidad sexual, la resistencia indígena en el sur del país entre los mapuches, variadas agrupaciones estudiantiles que se asocian en “colectivos”, asociaciones de trabajadores y profesionales que buscan crear instancias de coordinación, y una extendida aunque fragmentaria red de organizaciones poblacionales, especialmente de jóvenes y mujeres, que se rearticulan en torno a tareas culturales y comunitarias (también “colectivos” que se definen políticamente), así como diversas iniciativas de solidaridad social. En el campo poblacional conviven estas iniciativas con diversos grados de autonomía o en relaciones de colaboración con ONG, los municipios o el Estado central. Predomina, sin embargo, una relación de tipo instrumental con el Estado, tanto con los municipios como con el Estado central, favorecida por la cultura débilmente democrática que organiza al Estado chileno y la estructuración de políticas públicas a través de “proyectos” a fondos concursables, sean éstos de origen municipal o del Estado central (FOSIS, FONDART, etc.).

La situación actual de los “movimientos” o dinámicas de base representa un campo complejo de ensayos democráticos, que reproducen formas tradicionales o dan paso a dinámicas de asociación “horizontales”, es decir, más en redes auto-gestionadas que como el resultado de la acción del Estado o del sistema de partidos. El contexto general no los favorece (ni el modelo de desarrollo neoliberal, ni las lógicas de Estado centradas en la gobernabilidad, ni los medios de comunicación al servicio de sus auspiciadores), y sin embargo, siguen representando el principal potencial democratizador de la sociedad chilena.

Conclusiones

A partir de una mirada panorámica de los movimientos sociales chilenos en el siglo XX, es posible sugerir algunas conclusiones de carácter ciertamente general.

En primer lugar, resulta claro que las diferencias sociales en Chile son de vieja data y que han estado en la base de recurrentes y cíclicas formas de movilización popular, que a su vez han influido significativamente en la política chilena.

En segundo lugar, los diversos movimientos sociales, tanto a partir de sus formas de organización, sus demandas específicas como sus movilizaciones —con mayor o menor autonomía con relación al sistema de partidos políticos chilenos— fueron portadores en el siglo XX de diversas propuestas de democratización de la sociedad chilena: los obreros, a propósito de la legislación laboral y las políticas de salarios; los campesinos, cuando se puso en marcha la reforma agraria; los pobladores, en su lucha por viviendas dignas en la ciudad. Estas demandas, por cierto, al multiplicarse, se articularon inevitablemente, se politizaron y criticaron el sistema político-institucional, cuestionando en los setenta el propio sistema y modelo de desarrollo capitalista.

En tercer lugar, no se puede ignorar que dada la diversidad de los movimientos sociales populares, éstos alcanzaron mayor impacto en la sociedad cuando fueron capaces de generar articulaciones propias, como las Asambleas de los años 20 o en confluencia con el sistema de partidos, proyectos como el Frente Popular, a fines de los treinta, y la Unidad Popular, en los setenta. Cada una de estas articulaciones generó problemas y tensiones específicas que no encontraron fácil solución en el sentido de una relación productiva y democrática entre partidos políticos y organizaciones sociales. Históricamente, esta relación ha desafiado e interrogado en distintas etapas las capacidades tanto de unos como de otros para contribuir al desarrollo de una “cultura democrática”, que pueda valorar las prácticas asociativas de base y al mismo tiempo democratizar las instituciones del Estado.

Finalmente, la dictadura militar representó por cierto la mayor operación represiva y disciplinadora de toda la historia chilena del siglo XX, afectando gravemente al conjunto de los movimientos sociales tradicionales. Y si bien es cierto que en la etapa autoritaria surgieron nuevos movimientos sociales, éstos no lograron proyectar políticamente sus demandas y aprendizajes democratizadores en la transición. El proceso de transición a la democracia, por su parte, al inhibir o ignorar las contribuciones de los movimientos sociales, puede asegurar temporalmente “la gobernabilidad”, pero no favorece ni los procesos encaminados a lograr una mayor igualdad social, ni tampoco a potenciar desde las bases el desarrollo de una cultura democrática. En cierto modo, la democracia chilena actual, en el mediano plazo, enfrentará no sólo el malestar de las nuevas generaciones, sino que se verá interpelada por las capacidades movimientistas que lentamente se rearticulan desde las bases de la sociedad. Para los nuevos movimientos sociales, el desafío mayor probablemente sea valorar sus propias experiencias como prácticas de transformación social y, a partir de ellas, encontrar los modos de articulación que les permitan constituirse en sujetos colectivos de cambio y democratización de la sociedad. Ello supone recrear una “política popular”, tarea que los obreros de principios del siglo XX pudieron imaginar y hacer cuando reconocieron sus propios aportes al desarrollo económico y social, así

como los límites de la democracia de las elites. Los nuevos y diversos movimientos sociales de hoy, en condiciones distintas, enfrentan desafíos semejantes.

Bibliografía

- Advis, Luis y Quilapayún. 1970. *Cantata Santa María de Iquique*, Santiago. Warner Music Chile.
- Álvarez, Rolando. 2003. *Desde las sombras. Una historia de la clandestinidad comunista (1973-1980)*. Santiago. LOM Ediciones.
- Aylwin, Mariana et al. 1986. *Chile en el siglo XX*. Santiago. Editorial Emisión.
- Angell, Alan. 1974. *Partidos políticos y movimiento obrero en Chile*. México. Ediciones Era.
- Barría, Jorge. 1971. *Historia de la CUT*. Santiago. Editorial Prensa Latina.
- Barría, Jorge. 1972. *El movimiento obrero en Chile*. Santiago. Ediciones Universidad Técnica del Estado.
- Correa, Sofía et al. 2001. *Historia del siglo XX chileno*. Santiago. Editorial Sudamericana.
- Régis Debray, 1971. *The Chilean Revolution*. New York: Vintage Books.
- Devés, Eduardo. 2002. *Los que van a morir te saludan. Historia de una masacre: Escuela Santa María de Iquique, 1907*. Santiago. LOM Ediciones (primera edición Nuestra América, 1987).
- De Schazo, Peter. 1983. *Urban Workers and Labor Unions in Chile, 1902-1927*. USA, Madison, Wis.
- De Diego Maestri, et al. 2002. *La Asamblea Obrera de Alimentación Nacional: Un hito en la historia de Chile*. Santiago. Academia de Humanismo Cristiano.
- De la Maza, Gonzalo y Garcés, Mario. 1985. *La explosión de las mayorías. Protesta Nacional, 1983-1984*. Santiago. Ediciones ECO.
- Garcés, Mario. 1985. *Movimiento obrero en la década del treinta y el Frente Popular* (tesis). Santiago. Pontificia Universidad Católica de Chile.
- Garcés, Mario y Milos, Pedro. 1988. *FOCH, CTCH, CUT Las centrales unitarias en la historia del sindicalismo chileno*. Santiago. Ediciones ECO.
- Garcés, Mario. 1991. *Crisis social y motines populares en el 1900*. Santiago. Ediciones Documentas (Segunda edición, LOM, 2003).
- Garcés, Mario. 2002. *Tomando su sitio. El movimiento de pobladores de Santiago, 1957-1970*. Santiago. LOM Ediciones.
- Gaudichaud, Frank. 2004. *Los cordones industriales y el poder popular*. Santiago. LOM Ediciones.
- González, Sergio. 1991. *Hombres y mujeres de la pampa*. Iquique. Taller de Estudios Regionales de Iquique.
- Grez, Sergio. 1997. *De la "regeneración del pueblo" a la huelga general. Génesis y evolución histórica del movimiento popular en Chile (1810-1890)*. Santiago, DIBAM.
- Illanes, María Angélica. 1993. *En el nombre del pueblo, del Estado y de la ciencia (...)*. *Historia social de la salud pública. Chile, 1880-1973*. Santiago. Colectivo de Atención Primaria.
- Jobet, Julio César. 1955. *Ensayo crítico del desarrollo económico-social de Chile*. Santiago. Editorial Universitaria.
- Moulian Tomás. 2002. "El deseo de otro Chile". En Tomás Moulian (coordinador), *Construir el futuro*. Santiago. LOM Ediciones: 137-175.
- Pinto, Julio. 1998. *Trabajos y rebeldías en la pampa salitrera*. Santiago. Editorial Universidad de Santiago.

- Pizarro, Crisóstomo. 1986. *La huelga obrera en Chile, 1890-1970*. Santiago. Ediciones SUR.
- Poblete, Moisés. 1945. *Derecho del trabajo y Seguridad social en Chile*. Santiago. Editorial Jurídica.
- Romero, Luis Alberto. 1984. "Condiciones de vida de los sectores populares en Santiago de Chile, 1840-1895 (Vivienda y Salud)". En *Nueva Historia*, Londres. Año 3, N° 9: 3-86.
- Ramírez, Hernán. 1956. *Historia del Movimiento Obrero en Chile*. Santiago. Ediciones Talleres Gráficos Lautaro.
- Ramírez, Hernán. 1984. *Origen y formación de Partido Comunista de Chile*. Moscú. Editorial Progreso.
- Salazar, Gabriel. 1985. *Labradores, peones y proletarios*. Santiago. SUR Ediciones.
- Salazar, Gabriel. 1990. "Historiografía y dictadura en Chile (1973-1990). Búsqueda, identidad, dispersión". En *Cuadernos Hispanoamericanos*. Madrid.
- Salazar, Gabriel y Julio Pinto. 1999a. *Historia contemporánea de Chile I. Estado, legitimidad, ciudadanía*. Santiago. LOM Ediciones.
- Salazar, Gabriel y Julio Pinto, 1999b. *Historia contemporánea de Chile II. Actores, identidad y movimiento*. Santiago. LOM Ediciones.
- Segall, Marcelo. 1953. *Desarrollo del capitalismo en Chile. Cinco Ensayos dialécticos*. Santiago. Editorial del Pacífico.
- Winn, Peter. 2004. *Tejedores de la revolución. Los trabajadores de Yarur y la vía chilena al socialismo*. Santiago. LOM Ediciones.



Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE, Web del Centro Estudios "Miguel Enríquez", CEME:

<http://www.archivochile.com>

Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.)

Envía a: archivochileceme@yahoo.com

NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores.

© CEME web productions 2003 -2006 